



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS

Piedecuesta, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

OBJETO A DECIDIR

Concluido como está el trámite de la presente acción de tutela, se procede a proferir la decisión que en primera instancia corresponda.

1. LA ACCION DE TUTELA

JORGE ANDRES CHAVEZ, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra **LA SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE PIEDECUESTA** y vinculado de oficio **LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA**, con el objeto de obtener el amparo judicial de su derecho fundamental de petición.

1.1. Hechos de la tutela.

Expuso, como sustento fáctico de la solicitud de amparo, con relevancia para el estudio del presente asunto, lo siguiente:

Que el 24 octubre 2023 radicó derecho de petición con número de radicado ante la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE PIEDECUESTA y no ha recibido respuesta alguna.

1.2. Pretensión.

Con base en los anteriores hechos solicitó se ampare su Derecho Fundamental de Petición y se ordene a la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE PIEDECUESTA, emitir la respuesta al derecho de petición radicado el 24 de octubre del 2023.



1.3. Admisión y trámite.

Una vez repartida la actuación, mediante auto de fecha 07 de noviembre de 2023, este Juzgado avocó el conocimiento de la presente acción constitucional en contra de la **SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE PIEDECUESTA** vinculando de oficio a la **SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA** y; disponiéndose correr traslado del libelo tutelar con el fin que la autoridad accionada y vinculada para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones, y ejerciera su derecho de defensa y contradicción, disponiéndose de este modo darle el trámite previsto en el decreto 2591 de 1991.

1.4. Manifestaciones de la accionada.

➤ **SECRETARÍA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE PIEDECUESTA.**

Indicó que no es cierto que el señor JORGE ANDRÉS CHÁVEZ haya radicado derecho de petición ante esa Secretaría de Tránsito y Movilidad el 24 de octubre de 2023, toda vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos, en donde se constató que no se recibió derecho de petición en esta dependencia a nombre del señor JORGE ANDRÉS CHÁVEZ, en la fecha indicada por el peticionario; adicionalmente, que los documentos allegados por el accionante, permiten evidenciar que el derecho de petición al cual hace referencia está dirigido a la Secretaría de Hacienda y del Tesoro de Piedecuesta.

Por lo anterior, permito solicitó la DESVINCULACIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, por cuanto esa Secretaría no vulneró los derechos fundamentales del actor.

➤ **SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**

Señaló que esa secretaria el 24 de octubre del 2023 recibió derecho de petición mediante el cual el actor solicitó la prescripción del acuerdo de pago por la supuesta indebida notificación del incumplimiento No. 00102 de fecha 02/02/2017.



Que al revisar el estado en el que se encuentra la petición se encuentra dentro de los términos establecidos por ley para dar respuesta, toda vez que el término para resolver la petición es de 15 días y la fecha máxima para dar respuesta sería para el 17 de noviembre del 2023.

No obstante, esa dependencia dio respuesta al accionante, tramitado mediante oficio No. 06477-23 del 08/11/2023 al email suministrado por el peticionario, esto es, notificaciones@abogadosjota.com el día 08/11/2023 informándole que actualmente esa secretaria tiene represadas más de 500 solicitudes a las cuales estará dando respuesta a medida que fueron radicadas, por lo que la fecha estimada para dar respuesta estará entre el 04 al 08 de diciembre del 2023 acorde con lo estipulado en el artículo 14 de la ley 1755 del 2015.

Por lo anterior, solicitó su desvinculación toda vez que esa secretaría no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela que consagra el artículo 86 de la Constitución Nacional, tiene por objeto que cualquier persona, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, pueda acudir ante cualquier juez de la república a demandar la protección de aquellos derechos ungidos con el carácter de fundamentales, cuando quiera que ellos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos taxativamente señalados por la ley.

La prosperidad de tal acción reside en que, si se observa violación a tales derechos, el juez pueda impartir una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. Esta clase de acción sólo se torna procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

El problema jurídico.

En este asunto se debe determinar si las partes accionadas vulneran al ciudadano JORGE ANDRES CHAVEZ, el derecho cuya protección ha sido



demandada, consistente en no haberle ofrecido respuesta alguna a un derecho de petición radicado el 24 de octubre de 2023.

ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL

1. DERECHO DE PETICION Y SU ALCANCE

La Constitución Política en su artículo 23, consagró el derecho de petición como una facultad de todo ciudadano para formular solicitudes a las autoridades correspondientes, y obtener de estas una respuesta oportuna y completa a las mismas. De acuerdo a lo anterior, en principio, esta garantía opera respecto de entidades o autoridades públicas, sin embargo, la segunda parte de la disposición faculta su ejercicio ante organizaciones privadas, una vez el legislador reglamente la materia. Pese a ello, y como el legislador no ha reglado este tema, ha sido la Corte Constitucional, como en otros casos, la encargada de desarrollar la materia a través de su jurisprudencia, a fin de que este derecho no se quede en letra muerta sino que pueda garantizarse en forma concreta y real.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y alcance del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, trazando algunas reglas básicas acerca de la procedencia y efectividad de esa garantía fundamental. Entre otras, en la sentencia T-1160A de 2001¹, esta Corporación resumió los siguientes criterios que se constituyen en pautas jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por los jueces de tutela, al aplicar la Constitución en casos similares²:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

¹ M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

² Sentencia T-191 de 2002, M. P. Jaime Córdoba Triviño.



“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6__ del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”³

En la sentencia T-1006 de 2001,⁴ la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más:

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”;⁵

k) “Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.⁶

En relación con su contenido esencial y respecto al ámbito de protección del derecho de petición, la jurisprudencia ha concluido lo siguiente:

“El derecho de petición, se define como aquel que permite a las personas presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular. Al respecto, debe entenderse que tal derecho no implica solamente la posibilidad de manifestar una inquietud ante la Administración sino que conlleva necesariamente el

³ Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

⁴ Sentencia T-1006 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

⁵ Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “...[las respuestas simplemente formales o evasivas]... no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución...”

⁶ Ver Sentencia T- 49 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.



derecho a obtener y a exigir una respuesta clara y definitiva sobre esa inquietud. T-395 de 1998.

- La garantía que se ofrece en el artículo 23 de la Carta se satisface sólo con respuestas. Las notas evasivas y los términos confusos, escapan al contenido de tal preceptiva. En el marco del derecho de petición, sólo tiene la categoría de respuesta, aquello que decide, que concluye, que afirma una realidad, que satisface una inquietud, que ofrece certeza al interesado. (T-439 de 1998).

- La Corte ha enfatizado en que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, la contestación de la administración, ha enfatizado la jurisprudencia, debe contener una respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución (T-395 de 1998).

El peticionario, ha recabado la jurisprudencia, no queda satisfecho cuando, siendo competente la autoridad a quien dirige su petición, ella se limita a enviar una contestación en la que aparentando que se atiende a la persona, en realidad no se decide directamente sobre el tema objeto de su inquietud, sea en interés público o privado, dejándola en el mismo estado de desorientación inicial. (T-228 de 1997).⁷

La Corte señaló entonces, en términos que se reiteran:

"...no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.)."

Al respecto debemos recordar que parte fundamental del derecho de petición es que la decisión que tome la administración, en uno u otro sentido, le debe ser comunicada oportunamente al particular, único interesado en la respuesta buscada. De esta manera, ha dicho la jurisprudencia, la información que se da al juez de tutela no constituye respuesta efectiva a la petición del particular.⁸ La sentencia T-388 del 19 de agosto de 1997, Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo señaló sobre el particular lo siguiente:

"El Juez parece entender que la ya transcrita comunicación, dirigida a él y no al peticionario, es una respuesta satisfactoria que responde a las directrices jurisprudenciales invocadas en el fallo.

"La Corte debe manifestar que no es así y que, por el contrario, se encuentra acreditada la vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.

"Lo que la entidad sindicada de violar el derecho de petición informe al juez de tutela para justificar la mora en la resolución o para suministrar datos sobre el trámite de una

⁷ Sentencia T-496 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil

⁸ Cfr. sentencia T-167 del 30 de abril de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.



solicitud no constituye respuesta al peticionario. El sentido del derecho fundamental en cuestión radica en que sea la persona solicitante la que reciba contestación oportuna. Cuanto se haga luego ante el juez de tutela, puesto que precisamente tal acción tiene por fundamento la violación del derecho, es ya tardío e inútil, a no ser que se trate de probar documentalmente que ya hubo respuesta y que ella se produjo en tiempo, con lo cual se desvirtuaría el cargo formulado.

“Tener por contestación lo que se informa al juez, en especial si -como en este caso- se está reconociendo por el propio ente obligado que todavía no se ha respondido la solicitud, es contraevidente.

“No entiende la Corte cómo puede negarse la protección judicial del derecho cuando un día antes de resolver el Juez ha tenido a la vista la más clara prueba de la negligencia administrativa y de la vulneración de aquél.”

Igualmente ha de tenerse en cuenta que el pasado 30 de junio de 2015 se promulgó la ley 1755 de 2015 mediante la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que servirá de fundamento para resolver el presente caso.

6. CASO EN CONCRETO

Descendiendo al caso concreto se tiene que el accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición y en consecuencia, se ordene a la accionada dar respuesta de fondo y oportuna a la petición radicada el 24 de octubre del 2023 pertinente a la prescripción de un comparendo impuesto en su contra.

Ahora bien, como asunto preliminar cabe preguntar si en el caso bajo estudio se reúnen los requisitos de procedencia de la acción de tutela para deprecar el amparo solicitado. De ser la respuesta afirmativa, se ha de verificar si el viable la concesión, en los términos solicitados por el accionante.

Así las cosas, frente al primero de los interrogantes planteados, en cuanto a la legitimación en la causa, por activa se encuentra cumplida, por cuanto el actor acude a este mecanismo constitucional por sí mismo para la defensa de sus derechos fundamentales, sin embargo, no sucede lo mismo por pasiva, frente a la LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PIEDECUESTA, toda vez que de los anexos aportados se observa que el actor no elevó petición alguna ante esta dependencia, por lo que no se encuentra en el deber de emitir respuesta alguna y así se declarará en la parte resolutive de esta sentencia.

Frente a la vinculada SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, si se cumple dicho requisito, por cuanto como lo ratificó esta



entidad, en efecto si recibió la solicitud aludida el 24 de octubre del 2023, y en ese orden de ideas el análisis se efectuará frente a la misma.

Por otra parte, en cuanto al requisito de inmediatez, se manifestó por el actor que la petición fue presentada el 24 de octubre del 2023, y la presente acción se presentó el 07 de noviembre del 2023 por lo que entre uno y otro evento solo transcurrieron 9 días.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, cabe recordar que el amparo constitucional resulta procedente en aquellas situaciones en las que, existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios de protección, éstos no resultan eficaces o idóneos para la protección efectiva del derecho fundamental alegado. En el caso concreto, dado que la Constitución Política prevé como contenido esencial del derecho de petición la obtención de *“pronta resolución”* -desarrollado en disposiciones legales que fijan a las autoridades o a los particulares términos breves de respuesta-, y así lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, se advierte que si bien es cierto que existen procesos ante la jurisdicción ordinaria contra la autoridad o el particular que omite o retarda una respuesta debida al ciudadano, éstos no resultan estructuralmente eficaces para la realización efectiva de este derecho.

Los anteriores motivos son suficientes para considerar que no existen otros mecanismos ordinarios para la reclamación aquí dada y, por ende, es procedente su estudio de fondo.

Por otra parte, y aunque la presente acción resulta procedente para el amparo del derecho fundamental de petición, se hace importante destacar que la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA informó en primer lugar que al momento de interponer el presente amparo constitucional, aun no se había cumplido el término legal para dar respuesta, situación que en efecto es cierta, como quiera que escasamente habían transcurrido nueve días contados desde la presentación de la petición, y legalmente esta entidad contaba hasta el 17 de noviembre del año en curso para proferir una respuesta.

No obstante, también informó que no es posible emitir una respuesta en esta fecha atendiendo el cumulo de peticiones presentadas ante esa dependencia y que



están pendientes de resolver, por lo que envió comunicación al actor indicándole que la respuesta a su petición sería resuelta entre el 04 al 08 de diciembre del 2023, atendiendo el orden de llegada de las solicitudes que han sido presentadas.

Lo anterior, igualmente fue comunicado al correo del accionante notificaciones@abogadosjota.com el día 08 de noviembre del año en curso, según se verificó de los anexos aportados por la SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA..

Por lo anterior, es claro para el despacho que la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 1755 del 2015 y atendiendo la prórroga solicitada aún se encuentra dentro del término legal para proferir la respuesta aquí reclamada, ya que indicó que esta se proferiría en la semana del 04 al 08 de diciembre del 2023, por lo que mal podría endilgársele vulneración alguna por cuanto legalmente está dentro de los términos para proferir respuesta, plazo, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

En ese orden de ideas, se negará el amparo deprecado en esta oportunidad por el señor JORGE ANDRES CHAVEZ, advirtiéndole que aunque la petición aún no ha sido resuelta no ha sido por negligencia de la SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA, si no ante la imposibilidad que presenta actualmente, por lo que fue necesario solicitar la prórroga legal para proferir la contestación pertinente en la fecha que le fue indicada al accionante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones mixtas de Piedecuesta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA de la acción de tutela presentada por **JORGE ANDRES CHAVEZ** identificado con la C.C. No. 1.098.609.890 en contra de la **SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA** por lo expuesto anteriormente.



SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional invocado por **JORGE ANDRES CHAVEZ** identificado con la C.C. No. 1.098.609.890, contra **LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PIEDECUESTA** por lo expuesto anteriormente.

TERCERO: NOTIFICAR el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros consagrados en el Artículo 30 del decreto 2591 de 1991, el cual podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR el presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CARLOS ENRIQUE SUAREZ DELGADO
JUEZ